

Conflictos por el agua asoman en el horizonte

THALIF DEEN

ESTOCOLMO.—Frente a la probable escasez de agua en las próximas décadas, la comunidad de Inteligencia de Estados Unidos ya pronosticó un gris escenario futuro: conflictos étnicos, tensiones regionales, inestabilidad política e incluso matanzas.

En los próximos diez años, “muchos países importantes para Estados Unidos seguramente experimentarán problemas de agua, como escasez, mala calidad o inundaciones, que alimentarán riesgos de inestabilidad y de fracasos en (el funcionamiento de) los estados, incrementando las tensiones regionales”, alertó la Evaluación Nacional de Inteligencia, publicada en marzo.

En julio, el presidente del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, Chris Kojm, predijo que, para el 2030, cerca de la mitad de la población mundial (actualmente más de 7 000 millones de personas) vivirá en áreas con severos problemas de agua, incrementando la probabilidad de asesinatos en masa.

En tanto, el periódico estadounidense The New York Times citó a Timothy Snyder, profesor de historia en la Universidad de Yale, afirmando en un simposio que “el pánico ecológico llevará a matanzas en las próximas décadas”.

Pero el director del Centro del Agua de la Universidad de Columbia, Upmanu Lall, fue más cauto. “No estoy seguro de que pueda pronosticar asesinatos masivos como resultado” de la falta de agua, dijo a IPS.

El experto señaló que no vaticinaba guerras o conflictos internacionales por recursos hídricos. “Pero sí creo que la competencia dentro de algunos de los países más grandes, como India, podría llevar a una lucha interna y al aumento del terrorismo y de los conflictos sectarios”, indicó.

Sin embargo, “evitar este futuro es posible si trabajamos en ello hoy”, añadió.

Este es uno de los temas analizados en la conferencia internacional celebrada en Estocolmo en el marco de la Semana Mundial del Agua, que concluyó el pasado viernes 31.

Lall consideró realista la proyección de que, si todo sigue igual, casi la mitad de la población mundial vivirá en “fuerte tensión por el agua” para el 2030. “Es un desafío urgente, en especial si consideramos la posibilidad de grandes



sequías, por ejemplo la de este año en Estados Unidos y en la India”.

Los impactos serán más severos y duraderos, alertó. Sin embargo, “si podemos traducir esta preocupación en acción, especialmente sobre cómo mejorar el uso del agua en la agricultura (sector), que es por lejos el consumidor más ineficiente, entonces podemos evitar este desastre”, sostuvo.

Por ahora hay conversaciones en esa dirección, pero no existen mandatos ni metas internacionales. “Es importante que esto sea asumido en los más altos niveles para evitar una considerable angustia en la población y en las economías del mundo”, añadió Lall.

Gary White, jefe ejecutivo y cofundador de la organización Water.Org, sí cree que el acceso a los recursos hídricos podría ser motivo de conflictos en los próximos años.

“Esto será particularmente así en áreas presionadas por la falta de agua y en las que hay grandes concentraciones de población pobre”, dijo a IPS.

“Sin embargo, también creo que la mayoría de los gobiernos a la postre actuarán y adoptarán las políticas, las regulaciones y los acuerdos transitorios correctos y necesarios para impedir grandes conflictos”, sostuvo.

Advirtió que podrían desatarse casos de escasez aguda que tendrían como consecuencia grandes pérdidas humanas y económicas, pero dijo creer que “un conflicto declarado sería algo excepcional”.

En general, las crisis regionales del agua se generan en forma relativamente lenta en comparación con la mayoría de los desastres naturales, y por tanto se pueden aprender las lecciones para evitar impactos similares en otros lugares, indicó.

“Pero esas crisis y conflictos tendrán un impacto mucho mayor en los pobres, porque las poblaciones más acomodadas siempre tienen opciones de desplegar tecnología para tratar los recursos hídricos locales (como la desalinización) o para trasladar el agua a través de sistemas de cañerías a lo largo de grandes distancias”, afirmó.

“Siempre he dicho que el derecho básico debe ser que todos puedan pagar para obtener agua potable”, dijo a IPS, en referencia a la decisión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el 2010 de declarar el agua y el saneamiento un derecho humano.

Hoy los pobres pagan más por el agua que los ricos, sea en dinero o en trabajo invertido para adquirirla. Tampoco los primeros tienen asegurada una calidad decente del recurso, lamentó.

“Aquí cuando digo pobres me refiero a los desfavorecidos económicamente en una sociedad particular, y también a las naciones que no son tan acomodadas”, indicó.

A menos que se extiendan servicios a esas personas, estas sufrirán, alertó. Pero para hacerlo se necesitan inversiones para desarrollarlos y mantenerlos.

“Sí, todos deberían pagar un precio por el agua, pero de acuerdo con sus medios, y así fortalecerían su derecho a acceder a una oferta confiable y de calidad”, sostuvo Lall.

Esa debería ser la gran meta, y no solo la declaración del agua como un derecho humano, afirmó. (IPS)

ROBERT H. WADE (*)

LOS ARGENTINOS y su gobierno están justificadamente orgullosos de su estrategia de reestructuración de la deuda externa, que permitió a la economía recuperarse bastante rápido después del 2002. Sin embargo, ya pasó una década y existe otro país que ofrece lecciones más contemporáneas que los gobiernos de los países del sur de Europa deberían aprender. Ese país es Islandia.

Alrededor del año 2000, el gobierno conservador de libre mercado de Islandia privatizó dos grandes bancos públicos orientados a negocios locales y permitió que se formara un tercer gran banco privado a partir de la fusión de un conjunto de entidades más pequeñas. El gobierno también removió la mayoría de las limitaciones de los bancos para sus operaciones y los impulsó a convertir a Islandia en un centro financiero internacional del Atlántico Norte. “Si Dubai puede hacerlo, por qué nosotros no podemos”, fue el espíritu de esa arenga.

Para el 2008, los tres grandes bancos islandeses se encontraban entre los 300 bancos más grandes del mundo, en un país donde la población llega solo a 310 mil personas. Sus activos sumaban diez veces el PIB de Islandia y su modelo de negocios dependía en forma central de su posibilidad de tomar deuda masivamente del mercado mayorista de crédito. En octubre del 2008,

El otro camino de Europa

los bancos colapsaron. La moneda nacional, la krona, perdió un 60 % de su valor de un día para otro. El mercado de valores se desplomó. En pocos meses, los precios de las casas cayeron 25 % en términos reales y la inflación subió hasta una cifra cercana al 20 %.

El FMI envió una misión que instruyó al gobierno a instalar controles de capitales para evitar una mayor fuga y ofreció expertos técnicos para enseñarles a los funcionarios del Banco Central islandés a aplicar esas políticas. La fuerte devaluación logró por sí misma una importante reducción del gasto. Así, con la bendición del FMI, el gobierno demoró los ajustes fiscales. Eso permitió aliviar las tensiones políticas, porque la devaluación podía presentarse como “un acto divino” que no era responsabilidad del Estado. El FMI intentó que el gobierno asumiera las deudas de los bancos quebrados como propias a partir de la presión de Suecia, donde estaban preocupados porque si Islandia se salía con la suya con el *default*, los países bálticos harían lo mismo con sus grandes préstamos del sistema bancario sueco. Las autoridades de Islandia rechazaron la idea, dado el tamaño de las deudas bancarias con relación a su base fiscal.

A comienzos del 2009, entre el 80 y 90 % de las empresas islandesas, incluyendo las

más grandes, eran incapaces de hacer frente a sus obligaciones, y entre el 25 y el 30 % de los hogares se encontraban en la misma situación. Los gobiernos del sur de Europa podrían aprender algo sobre cómo Islandia respondió a esa situación.

Para la deuda de las empresas, la estrategia requirió que los bancos reconocieran la pérdida en el valor de las obligaciones que tenían las empresas, al punto de que las entidades bancarias pudieran esperar tener una ganancia si se quedaban con los activos de las empresas. Las pequeñas y medianas empresas pudieron solicitar mayores alivios de deuda, siempre y cuando pudieran ofrecer evidencia plausible de su futuro flujo de caja y el tamaño de la ayuda estaba vinculado con el valor descontado de sus ingresos futuros.

Para las deudas de las familias se requirió que los bancos redujeran el valor contable excesivo del 110 % del valor de cada propiedad. Las familias que incluso no podían hacer frente a los préstamos ajustados pudieron pedir ayudas especiales. Un elemento importante es que no se permitió que las calificaciones crediticias de las distintas familias fueran afectadas por este escenario especial. Además, quienes se encontraban cerca de la línea de pobreza, pudieron solicitar un subsidio adicional para conservar la propiedad de sus hogares.

El resultado global dejó a los bancos con una mora tan pequeña como era posible y sin forzar masivas ejecuciones hipotecarias o quiebras de empresas. Pocas familias perdieron sus hogares. La economía se estabilizó en el 2010 y volvió a crecer en el 2011, aunque lo hizo lentamente. El gobierno y las firmas recuperaron el acceso a los mercados de crédito internacionales a tasas de interés sostenibles. Sin embargo, eso no fue posible sin ningún costo político. El gobierno recibió un feroz ataque de aquellos individuos que no habían tomado créditos impagables e insostenibles. Esas personas sienten que están pagando por el despilfarro de otros.

En comparación con la situación de Noruega, después de su crisis bancaria a comienzos de la década de los años noventa y las economías bálticas después del 2008, la recuperación de Islandia fue mucho mejor. Esto está muy vinculado con el hecho de que se evita realizar lo que hoy ya es muy común en Grecia, España y Portugal, donde los bancos obligan a las empresas y a las familias con patrimonio negativo a que renuncien a la propiedad de sus bienes, como si los propios bancos no tuvieran ninguna responsabilidad por prestar demasiado.

(*) Profesor de Economía Política de la London School of Economics. Texto escrito para la sección de opinión de Página 12 de Buenos Aires.